

Plaza pública

para la edición del 24 de marzo de 1995

Inseguridades

Miguel Ángel Granados Chapa

Se ha formalizado la información de que ofrecimos una primicia el domingo pasado, en este lugar: Ernesto Zedillo Velasco, primogénito del Presidente de la República, fue asaltado el miércoles de la semana pasada, cuando salía de la Universidad Anáhuac, donde estudia arquitectura. Lo acompañaba su chofer, y a prudente distancia una escolta de miembros del estado mayor presidencial, advirtió cuando dos individuos armados descendieron de un Spirit blanco, donde permaneció una tercera persona. Los atacantes fueron sometidos sin que se disparara un solo tiro.

Se trata de tres miembros en activo de la policía judicial del estado de México, en cuyo territorio (municipio de Naucalpan) se produjo el episodio. Un jefe de grupo, Francisco Cocoletzi y los agentes Fernando Mauricio Olvera Moreno y Eleazar Olvera Luna, fueron los agresores sorprendidos por la escolta militar. Cuando los mandos de la policía judicial mexiquense fueron avisados de esta captura, se produjo una movilización irregular de miembros de ese cuerpo, que pretendieron rescatar a sus compañeros, no se sabe si por *sprit de corps* o por temor a que probables complicidades salieran a relucir. Fracasaron en su intento de liberar a sus compañeros, que luego de ser

llevados provisionalmente al campo militar número uno, están en el penal de Barrientos, suponemos que ya iniciado el proceso en su contra.

Las autoridades han puesto el acento en asegurar que se trata de un incidente más, de los muchos que ocurren a diario en la mancha urbana del valle de México, y que no era un atentado dirigido específicamente contra un miembro de la familia presidencial. Suponen que no se trata de un intento de secuestro, porque la experiencia reciente en casos de esa naturaleza muestra un despliegue mayor de efectivos. La conducta de los asaltantes probó, a juicio de las autoridades, que buscaban solamente atracar al pasajero y al tripulante de una camioneta Cherokee que les atrajo, aunque ese género de vehículos no sean extraños en La Herradura y Tecamachalco, los barrios residenciales donde se ubican la Universidad Anáhuac y el sitio donde ocurrió el percance. No estaban, además, preparados para la sorpresa que el azar les deparó.

Como quiera que sea, el proceso contra los asaltantes del hijo del Presidente puede ser la punta de una hebra que conduzca al esclarecimiento de la gran cantidad de asaltos que han proliferado a últimas fechas en la ciudad de México, y que están regidos por el mismo patrón: dos individuos armados se aproximan a un vehículo detenido por la luz roja de un semáforo, amagan al chofer y lo despojan del automóvil, la mayor parte de las veces simplemente haciéndolo descender, aunque en otras lo llevan consigo y lo arrojan calles adelante. Una modalidad peor consiste en robar otras pertenencias a las

víctimas y forzarlos a obtener dinero de cajeros bancarios automáticos o mediante la firma de cheques. No es infrecuente que si los asaltados se resisten, los asaltantes disparen sobre ellos. La frialdad y destreza con que asesinan o lesionan a sus víctimas, y el desparpajo con que obran, a plena luz del día y no necesariamente lejos de instalaciones policiacas, muestran que no temen ser aprehendidos. Dos ejemplos: Un atraco de este género culminó con el homicidio de un funcionario de Nacional Financiera, en la avenida Chapultepec, a decenas de metros de la sede de la Secretaría de Seguridad Pública, que está en la calle Liverpool. Otros han ocurrido en el cruce de Paseo de la Reforma y Prado Norte, en las Lomas de Chapultepec, muy cerca del cuartel policiaco de la delegación Miguel Hidalgo.

La impunidad de ese género de atracadores puede resultar de complicidades explícitas, o de un simple dejar hacer, practicado por las agencias policiacas cuando saben que son colegas suyos quienes perpetran los asaltos, para no generar un conflicto que puede derivar en riñas colectivas. La complicidad, es decir el pacto entre delincuentes y guardianes no es imposible. Más de una vez, al ser denunciado un asalto en cajeros automáticos, los agentes encargados de la seguridad en la zona ponen especial atención en hacerse de los comprobantes expedidos por la máquina, acaso para no ser a su vez defraudados al recibir la comisión que en el asalto les corresponda, y que pueden documentar de esa manera.

Los datos sobre la identidad de los asaltantes (no sobre su pertenencia a la judicial mexiquense, que eran ya conocidos) surgieron anteayer en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal (ARDF). Al comparecer ante ese órgano el procurador de justicia José Antonio González Fernández, fue interrogado al respecto por el asambleista Pedro Peñaloza, que preside la comisión de seguridad pública de la ARDF. El ex diputado perredista recordó también los casos de periodistas que han sido agredidos, de cuyos sucesos hemos dado cuenta asimismo en esta columna. El procurador precisó que en los últimos dos meses y medio ha habido catorce casos de esa clase (aunque en una oficina superior oí que eran 18, quizá porque el lapso de que se hablaba era mayor) en que las víctimas pertenecen al gremio de la comunicación, si bien no es claro que hayan sido asaltados por ese hecho, o lo fueron como tantos otros ciudadanos.

Del proceso contra los judiciales que padecieron la mala suerte de escoger entre sus víctimas nada menos que al hijo mayor del Presidente de la República, circunstancia por la cual pudieron ser detenidos, tal vez surja información muy valiosa para enfrentar la ola de violencia que agravia a la sociedad (y que no es privativa de la capital, pues en Michoacán hasta se ha suspendido el servicio de transporte público en carreteras federales, en protesta por la inseguridad). Por eso nos detenemos una vez más en el tema, ya que ahora no se trata simplemente de repetir el quejumbroso lamento de lo mal que estamos. Ahora es posible identificar como

fuente de impunidad, y destruirla, la confusión de intereses de quienes delinquen y quienes deben perseguirlos.

indicaciones para la edición

1) Sumario

La detención de los fallidos asaltantes del hijo mayor del Presidente de la República hará posible, tal vez, indagar sobre la actividad de agentes policiacos que delinquen en sus ratos libres, y han provocado el incremento de la violencia callejera.

2) Recuadro (con foto de José Antonio González)

El procurador de Justicia del Distrito Federal, José Antonio González Fernández, al presentarse ante la Asamblea de Representantes de la capital, dijo que han sido 14 los periodistas asaltados u hostigados en los últimos dos meses y medio.

PLAZA PÚBLICA

MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA

Inseguridades

La detención de los fallidos asaltantes del hijo mayor del presidente de la República hará posible, tal vez, indagar sobre la actividad de agentes policiales que delinquen en sus ratos libres, y han provocado el incremento de la violencia callejera.



Se ha formalizado la información de que ofrecemos una primicia el domingo pasado, en este lugar: Ernesto Zedillo Velasco, primogénito del presidente de la República, fue asaltado el miércoles de la semana pasada, cuando salía de la Universidad Anáhuac, donde estudia arquitectura. Lo acompañaba su chofer, y a prudente distancia una escolta de miembros del Estado Mayor Presidencial, advirtió cuando dos individuos armados descendieron de un Spirit blanco, donde permaneció una tercera persona. Los atacantes fueron sometidos sin que se disparara un solo tiro.

Se trata de tres miembros en activo de la policía judicial del estado de México, en cuyo territorio (municipio de Naucalpan) se produjo el episodio. Un jefe de grupo, Francisco Coccoletzi y los agentes Fernando Mauricio Olvera Moreno y Eleazar Olvera Luna, fueron los agresores sorprendidos por la escolta militar. Cuando los mandos de la policía judicial mexiquense fueron avisados de esta captura, se produjo una movilización irregular de miembros de ese cuerpo, que pretendieron rescatar a sus compañeros, no se sabe si por *esprit de corps* o por temor a que probables complicidades salieran a relucir. Fracasaron en su intento de liberar a sus compañeros, que luego de ser llevados provisionalmente al campo militar número uno, están en el penal de Barrientos, suponemos que ya iniciado el proceso en su contra.

Las autoridades han puesto el acento en asegurar que se trata de un incidente más, de los muchos que ocurren a diario en la mancha urbana del Valle de México, y que no era un atentado dirigido específicamente contra un miembro de la familia presidencial. Suponen que no se trata de un intento de secuestro, porque la experiencia reciente en casos de esa naturaleza muestra un despliegue mayor de efectivos. La conducta de los asaltantes probó, a juicio de las autoridades, que buscaban solamente atracar al pasajero y al tripulante de una camioneta Cherokee que les atrajo, aunque ese género de vehículos no sean extraños en La Herradura y Tecamachalco, los barrios residen-

ciales donde se ubican la Universidad Anáhuac y el sitio donde ocurrió el percance. No estaban, además, preparados para la sorpresa que el azar les deparó.

Como quiera que sea, el proceso contra los asaltantes del hijo del Presidente puede ser la punta de una hebra que conduzca al esclarecimiento de la gran cantidad de asaltos que han proliferado a últimas fechas en la ciudad de México, y que están regidos por el mismo patrón: dos individuos armados se aproximan a un vehículo detenido por la luz roja de un semáforo, amagan al chofer y lo despojan del automóvil, la mayor parte de las veces simplemente haciéndolo descender, aunque en otras lo llevan consigo y lo arrojan calles adelante. Una modalidad peor consiste en robar otras pertenencias a las víctimas y forzarlos a obtener dinero de cajeros bancarios automáticos o mediante la firma de cheques. No es infrecuente que si los asaltados se resisten, los asaltantes disparen sobre ellos. La frialdad y destreza con que asesinan o lesionan a sus víctimas, y el desparpajo con que obran, a plena luz del día y no necesariamente lejos de instalaciones policiales, muestran que no temen ser aprehendidos. Dos ejemplos: Un atraco de este género culminó con el homicidio de un funcionario de Nacional Financiera, en la avenida Chapultepec, a diez metros de la sede de la Secretaría de

Seguridad Pública, que está en la calle Liverpool. Otros han ocurrido en el cruce de Paseo de la Reforma y Prado Norte, en las Lomas de Chapultepec, muy cerca del cuartel policiaco de la delegación Miguel Hidalgo.

La impunidad de ese género de atracadores puede resultar de complicidades explícitas, o de un simple dejar hacer, practicado por las agencias policiales cuando saben que son colegas suyos quienes perpetran los asaltos, para no generar un conflicto que puede derivar en riñas colectivas. La complicidad, es decir el pacto entre delincuentes y guardianes no es imposible. Más de una vez, al ser denunciado un asalto en cajeros automáticos, los agentes encargados de la seguridad en la zona ponen especial atención en hacerse de los comprobantes expedidos por la máquina, acaso para no ser a su vez defraudados al recibir la comisión que en el asalto les corresponda, y que pueden documentar de esa manera.

Los datos sobre la identidad de los asaltantes (no sobre su pertenencia a la judicial mexiquense, que eran ya conocidos) surgieron anteayer en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal (ARDF). Al comparecer ante ese órgano el procurador de justicia José Antonio González Fernández, fue interrogado al respecto por el asambleísta Pedro Peñaloza, que preside la comisión de seguridad pública de la ARDF. El ex diputado perredista recordó también los casos de periodistas que han sido agredidos, de cuyos sucesos hemos dado cuenta asimismo en esta columna. El procurador precisó que en los últimos dos meses y medio ha habido catorce casos de esa clase (aunque en una oficina superior oí que eran 18, quizás porque el lapso de que se hablaba era mayor) en que las víctimas pertenecen al gremio de la comunicación, si bien no es claro que hayan sido asaltados por ese hecho, o lo fueron como tantos otros ciudadanos.

Del proceso contra los judiciales que padecieron la mala suerte de escoger entre sus víctimas nada menos que al hijo mayor del presidente de la República, circunstancia por la cual pudieron ser detenidos, tal vez surja información muy valiosa para enfrentar la ola de violencia que agravia a la sociedad (y que no es privativa de la capital, pues en Michoacán hasta se ha suspendido el servicio de transporte público en carreteras federales, en protesta por la inseguridad). Por eso nos detenemos una vez más en el tema, ya que ahora no se trata simplemente de repetir el quejumbroso lamento de lo mal que estamos. Ahora es posible identificar como fuente de impunidad, y destruirla, la confusión de intereses de quienes delinquen y quienes deben perseguirlos.



El procurador de Justicia del DF, José A. González Fernández, al presentarse ante la Asamblea de Representantes de la capital, dijo que han sido 14 los periodistas asaltados u hostigados en los últimos dos meses y medio.